



Bogotá, D.C., dieciséis (16) de mayo de dos mil veintidós (2022)

REFERENCIA

EXPEDIENTE No.: 11001-33-35-010-2022-00156-00
ACCIONANTE: JEISSON FERNEY BURGOS LOMBO, ELVIA MARIA LOMBO GOMEZ y PAOLA ANDREA ROCHA
ACCIONADAS: POLICÍA NACIONAL
CLASE: ACCIÓN DE TUTELA

1.- De conformidad con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, concordante con el artículo 1° inciso 1° del Decreto 1382 de 2000, y el Decreto 1983 del 30 de noviembre de 2017, se **ADMITE** la ACCIÓN DE TUTELA instaurada por los señores **JEISSON FERNEY BURGOS LOMBO** identificado con cédula de ciudadanía 1.016.018.609, **ELVIA MARIA LOMBO GOMEZ** identificada con cédula de ciudadanía 39.705.947 y **PAOLA ANDREA ROCHA** identificada con cédula de ciudadanía 1.024.519.319, en contra de la entidad **POLICÍA NACIONAL**, en procura de la protección de los derechos fundamentales de igualdad, debido proceso, subsistencia, a la familia, dignidad humana, trabajo en condiciones dignas y unidad familiar.

2.- Por otra parte, se avizora que la parte accionante formuló una solicitud de medida provisional, encaminada a que se ordene a la entidad accionada *“revoque el traslado del suscrito al departamento de Policía de Caquetá, PARA EVITAR QUE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES de los suscritos SE SIGAN AFECTANDO DE UNA MANERA QUE PUEDA SER IRREVERSIBLE como se denota el daño que está sufriendo mi madre en su vida en su salud , así como los pues (sic) de igual forma se está poniendo en riesgo no solo al suscrito sino también a mi compañera , dejando claro así que el traslado puede causar una violación al Derecho fundamental a la salud y a la vida y esta vulneración puede ser irreversible para mi madre que sufre de cáncer y que depende de mí ayuda y mi apoyo”*.

3.- La Sala Plena de la Corte Constitucional en el Auto 312 de 2018 sintetizó tres exigencias básicas para que la adopción de medidas provisionales bien sea de oficio o a solicitud de parte, resulte procedente. Dichos presupuestos son los siguientes:
(i) Que la solicitud de protección constitucional contenida en la acción de tutela tenga vocación aparente de viabilidad por estar respaldada en fundamentos: (a) fácticos posibles y (b) jurídicos razonables, es decir, que exista la apariencia de un buen derecho (*fumus boni iuris*).

(ii) Que exista un riesgo probable de que la protección del derecho invocado o la salvaguarda del interés público pueda verse afectado considerablemente por el tiempo transcurrido durante el trámite de revisión, esto es, que haya un peligro en la demora (*periculum in mora*).

(iii) Que la medida provisional no genere un daño desproporcionado a quien afecta directamente.

4.- En cuanto al primer presupuesto, la Corte Constitucional en el Auto 251 de 2020, lo definió *“como un principio de veracidad en cuanto a la afectación del derecho o a la protección del interés público invocado como fundamento de la pretensión principal de la demanda de amparo”*. Aunque la misma Corte reconoció que en la fase inicial del proceso no es posible arribar a un nivel total de certeza sobre la violación de los derechos fundamentales en controversia, sí es necesario un



estándar de veracidad apenas mínimo. Por tal razón, la solicitud de medida provisional *“debe estar soportada en las circunstancias fácticas presentes en el expediente y en apreciaciones jurídicas razonables, sustentadas en la jurisprudencia de la Corte Constitucional”*.

5.- Por su parte, en el análisis del segundo requisito (*periculum in mora*) es necesario sopesar el riesgo de que, al no adoptarse la medida cautelar, ocasione un perjuicio o daño mayor del que se expone en la demanda que, de no precaverse, transforme en tardío el fallo definitivo. En palabras de la Corte, este requisito puede identificarse como *“un temor fundado de que el derecho se frustre o sufra menoscabo durante la sustanciación del proceso”*¹.

6.- En la providencia en comento, la Corte precisó que el análisis de los dos presupuestos o requisitos debe ser conjunto. Precisamente, el segundo requisito (*periculum in mora*) impide que el juez de tutela profiera una orden ante la simple apariencia de verdad (*fumus bonis iuris*) de la solicitud cautelar. Ello quiere decir que si no existe riesgo de que se ocasione un daño mayor al señalado en la demanda de tutela la medida debe ser denegada, aun cuando exista apariencia de buen derecho. En palabras de la Corte, *“la medida provisional no es el escenario procesal para resolver el asunto de fondo, así se cuente con todos los elementos para tomar una decisión. El Artículo 7 del Decreto 2591 de 1991 solo se activa cuando, además de la apariencia de verdad, se requiera la intervención urgente del juez. A su vez, esto supone la amenaza de un perjuicio irremediable a un derecho fundamental o al interés público, que no podría ser corregido en la sentencia final.”*

7.- Por último, el tercer requisito incorpora el concepto de la proporcionalidad al análisis. La Corte indicó que *“si bien en esta fase inicial no es dable desarrollar plenamente el juicio de proporcionalidad, sí es necesario ponderar entre los derechos que podrían verse afectados con la medida. La ponderación que esta etapa demanda funge como una última salvaguarda en favor del ciudadano. Evita que se tomen medidas que, aunque podrían estar justificadas legalmente, ocasionarían un perjuicio grave e irreparable. La proporcionalidad no supone un estándar universal y a priori de corrección, sino que exige una valoración que atienda las particularidades de cada caso concreto”*.

8.- Una vez leído el escrito de tutela de la referencia y analizado el material probatorio aportado al expediente, el Juzgado considera que no se reúnen las condiciones necesarias para acceder a la medida cautelar solicitada, sin que ello implique prejuzgamiento.

9. En cuanto a la apariencia de buen derecho, el Juzgado constata que el demandante dentro de las documentales anexas a la demanda, aportó registros civiles de nacimiento y de matrimonio de él, que acreditan la relación con las otras dos accionantes (madre y esposa).

Sin embargo, sin que implique prejuzgamiento alguno, no se avizora por el momento el principio de veracidad en cuanto a la afectación de los derechos fundamentales invocados de debido proceso tales como el debido proceso, subsistencia y unidad familiar, pues con los anexos de la tutela no se acreditan situaciones fácticas tales como la existencia de una orden de traslado desde Bogotá hasta el departamento de Caquetá del accionante, o que su progenitora se encuentra en una situación de salud y vulnerabilidad y que él accionante Jeisson Burgos es el que responde por su cuidado y acompañamiento.

10. Dado lo anterior, tampoco se cumple el segundo presupuesto para acceder a la medida deprecada, habida cuenta que no se observa tampoco un perjuicio o daño

¹ Ibídem



mayor o inminente que, de no accederse en este momento a la medida, transforme en tardío el fallo definitivo.

Por consiguiente, **se dispone:**

1. Por el medio más expedito, comuníquese la iniciación de la actuación al Representante Legal de la accionada **POLICÍA NACIONAL** y/o quien haga sus veces, a quien se les enviará copia de la tutela y sus anexos para que dentro del término de un (1) día contado a partir de la fecha de su recibo, se refiera sobre todos y cada uno de los hechos relacionados en el escrito de ésta.
2. Hágase la salvedad a la entidad requerida de que, de no ser el funcionario competente para el conocimiento de la acción de la referencia, se remita de manera inmediata al que ostente dicha facultad, informando tal situación al Despacho.
3. **NEGAR la medida provisional** solicitada en el líbello.
4. REQUERIR a los accionantes, para que alleguen la siguiente información:
 - Documentos que acrediten el estado de salud actual de la señora ELVIA MARIA LOMBO
 - Informar con quien vive la señora ELVIA MARIA LOMBO
5. Notifíquese mediante comunicación este auto a la parte accionante.
6. Con el valor legal que le corresponda téngase como pruebas las documentales acompañadas con el escrito de tutela.

Teniendo en cuenta las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y el Consejo Superior de la Judicatura tendientes a la mitigación del COVID 19, los documentos, respuestas, requerimientos o memoriales, deben ser allegados a través de correo electrónico a la dirección admin10bt@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

AUGUSTO LLANOS RUIZ
JUEZ

A.O.R.-

Firmado Por:

Augusto Llanos Ruiz
Juez Circuito
Juzgado Administrativo
010
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: [dbc190c77704bbe4943775e168fdde905cdb7185e43aaf7de01b6b77ab9df18f](#)
Documento generado en 16/05/2022 10:22:10 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
Sección Segunda
Expediente No.: 11001-33-35-010-2022-00156-00
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>